

Movimientos rurales y ajuste estructural, 33 años de resistencia

Víctor M. Quintana S.*

Las y los campesinos mexicanos, así debilitados, mermados, excluidos, con enemigos cada vez más poderosos, continúan resistiendo. Ante las descomunales fuerzas de la globalización neoliberal, no son pasivos, ni ante la explotación y exclusión, sino que emplean diversas formas o estrategias individuales, comunitarias o gremiales de resistencia.

En los años sesenta, le preguntaron al general chihuahuense Marcelo Caraveo, quien fue orozquista, huerista, obregonista y terminó siendo escobarista, cuál fue su mayor hazaña durante la Revolución. “¡¡¡Sobrevivir!!!”, respondió pronto al reportero, y agregó: “¿Para qué quiere más?”

Y así están los campesinos mexicanos. Siguen ahí, sobreviviendo, vivitos y peleando. Las utopías neoliberales de hace tres décadas pensaban que éstos se acabarían, ya porque migrarían a las ciudades o a Estados Unidos, o porque una minoría de ellos se convertiría en empresarios agrícolas. Pero no fue así: ha habido una gran emigración, es cierto, pero quedan en el medio rural mexicano más de 25 millones de personas; algunos de los cuales, productores y productoras, han construido

sólidas empresas de economía social, y unos pocos han llegado a ser empresarios agrícolas exitosos; pero el grueso del campesinado sigue ahí: resistiendo, adaptándose, diversificándose. En estas líneas presentamos el contexto de tres décadas de cambios estructurales y sus efectos en el campo mexicano, y cómo han ido emergiendo ahí, desde abajo, diferentes movimientos rurales no sólo de campesinos, sino de muy diversos actores rurales.

El ajuste estructural en el campo mexicano... y más allá

El punto de quiebre en el proceso de la agricultura mexicana es 1982. En agosto de ese año, aprovechando la declaración de quiebra del país, se impone a México el primer paquete de medidas de ajuste estructural por parte del Fondo Monetario Interna-

cional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se le llama a este trío “El Consenso de Washington”. En agricultura este paquete se traduce en dos grandes vertientes de política: 1) la severa reducción de la participación del Estado en la promoción del desarrollo económico sectorial (no sólo cayeron dramáticamente la inversión y el gasto agropecuarios, sino que se suprimió el sistema de precios de garantía) y la liberalización de los precios de los insumos y la maquinaria. Y 2) la apertura comercial unilateral y abrupta realizada durante los años ochenta y amarrada en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al llegar Salinas al poder en 1988, se inicia la segunda generación de medidas de ajuste estructural de la economía. Continúa con la retirada del Estado del sector, promueve la

* Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

firma y entrada en vigor del TLCAN y busca la privatización de la propiedad agraria, imponiendo una contrarreforma agraria: desde 1992 las tierras ejidales se pueden enajenar y las compañías por acciones pueden poseer propiedades rurales. El resultado de esta apuesta salinista es el fracaso: actualmente ni el 1% de la inversión extranjera directa que llega a México se dirige hacia la agricultura.

El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) continúa la guerra contra la agricultura nacional. Desaparece los pocos precios de garantía que quedaban, continúa con la apertura comercial, tolera las importaciones más allá de los cupos permitidos, sigue reduciendo el presupuesto agrícola y cierra la Conasupo.

Posteriormente, las políticas de ajuste se han ido adaptando a las exigencias del capitalismo internacional. Las más recientes son las impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto dentro de su paquete de reformas, sobre todo la energética, la de competencia económica y la del agua. Con ellas lo que se pretende es no sólo apropiarse del trabajo y los productos de los hombres y las mujeres del campo mexicano, sino también del territorio, de los recursos naturales, del paisaje, del patrimonio genético.

Mediante estas políticas de gobierno, se ha venido imponiendo a la agricultura mexicana la subordinación de la agricultura a la industria y a las finanzas en el marco de la globalización neoliberal. Al respecto, Blanca Rubio señala que ha de ponerse en manifiesto el vínculo entre la agricultura y la industria, que puede revestir dos formas: la primera, a través del aporte de alimentos que la primera hace a la segunda, con lo que contribuye al establecimiento de salarios, divisas y fuerza de trabajo. La segunda, mediante la aportación de materias primas que la agricultura hace a las industrias¹.

Esta vinculación no es simétrica: la industria, actividad capitalista por antonomasia, subordina a la agricultura para poder avanzar y seguir obteniendo cada vez más lucro. Esta dinámica resulta, sin embargo, contradictoria: la industria se beneficia y se moderniza, pero la agricultura se va empobreciendo y se atrasa al transferir enormes volúmenes de excedente a la primera. La forma de subordinación va cambiando, va adoptando diversas formas y fases. Se trata de una subordinación con efectos *desestructurantes*: declive de precios, quiebra de productores, destrucción de

comunidades rurales, exclusión y expulsión de grandes masas de campesinos.

La reforma institucional impuesta a sangre y fuego durante los gobiernos de Salinas y de Zedillo cumplió un papel importante: hacer funcionales nuestras leyes y nuestras instituciones al nuevo ciclo de expansión del capitalismo en el campo, ese que Blanca Rubio llama “la nueva fase agroalimentaria global”. Con ellas se integró el país al manejo global de los alimentos como “commodities”, como importador de cereales, oleaginosas, cárnicos y lácteos, a la vez que dejaba de ordenar el mercado de alimentos.

Para contener la disidencia y acotar o cooptar a las organizaciones de productores, el salinismo-neoliberalismo creó dos espacios de concertación diferentes: el Consejo Agrario Permanente para las organizaciones campesinas y el Consejo Nacional Agropecuario, instancia de los empresarios agrícolas de diversos niveles. En el interior de estos espacios ha tratado el régimen, no de debatir lo esencial de sus políticas hacia la agricultura, sino de poner una válvula de escape y de procesamiento de los conflictos que surgen con la implementación de sus políticas excluyentes.

Los efectos desestructurantes del ajuste estructural

El cambio desfavorable hacia los campesinos, los pequeños y medianos productores en la correlación de fuerzas tiene muy diversos factores: el tecnológico, pues con el descenso de inversión pública en el campo los pequeños productores se rezagan; el productivo-económico, pues la producción campesina pierde un considerable peso específico tanto en volumen como en valor; el sociodemográfico, pues se reduce la población campesina, se avejenta y se destruyen comunidades; el político, pues se rompe la alianza Estado-campesinos y se disminuye considerablemente el peso político de las organizaciones campesinas en las decisiones públicas más importantes.

Entonces, al no poder ya incidir muy significativamente en la orientación de la política general hacia el campo, los campesinos ven cómo ésta se va orientando primordialmente en beneficio de los agronegocios transnacionales, los oligopolios nacionales y los grandes productores orientados a la exportación. Por otro lado, señalan Haubert y Torres: “La descalificación a los ‘productores’ se encubre con nuevos ropajes que confirman que se han vuelto en gran parte inútiles para el sistema y sus actores dominantes. En lo sucesivo, se les va a destinar a ser beneficiarios de po-

¹ Blanca Rubio. *Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*. México: Plaza y Valdés, 2ª edición, 2003.

líticas sociales de corte asistencialista que arrancaron con el programa Solidaridad, las cuales se han profundizado con el Progres y Oportunidades”².

Este proceso de deterioro de la correlación de fuerzas sociopolíticas desfavorable para los campesinos va acompañado de un proceso de construcción de la democracia en el campo mexicano. Los lazos del corporativismo se fueron rompiendo en la medida en que las organizaciones del PRI-gobierno ya no fueron capaces de canjear beneficios al campesino por apoyo político, y porque desde abajo avanzó, alimentado por muchas vertientes de izquierda, guerrilleras, indigenistas, cristianas de liberación, un proceso de construcción de actores rurales democráticos. Gracias a esto, se logró una gradual democratización del campo mexicano, un proceso gradual de construcción de ciudadanía. Lo paradójico es que cuando esta ciudadanía se logra construir, el modelo neoliberal excluyente no está en la medida ni mucho menos en la disposición de hacer cumplir los derechos de esa ciudadanía recién conquistada. Así, al proceso de *beneficios sin ciudadanía* del periodo de sustitución de importaciones, corporativista, sucede un periodo, el actual, de *ciudadanía sin beneficios*.

Y sin embargo resisten... el arsenal del campesinado mexicano

Las y los campesinos mexicanos, así debilitados, mermados, excluidos, con enemigos cada vez más poderosos, continúan resistiendo. Ante las descomunales fuerzas de la globalización neoliberal, han sabido diversificar su resistencia. Antes de proseguir, ampliemos un poco más el concepto de “resistencia”.

Nuestra hipótesis es que los campesinos no son pasivos ante la explotación y exclusión, sino que emplean diversas formas o estrategias individuales, comunitarias o gremiales, de resistencia. Para ello acudimos al concepto de resistencia formulado tanto por James Scott como por el mexicano Guillermo Bonfil. Para el primero, la resistencia no sólo son las luchas de los campesinos en defensa de sus tierras y sus pueblos, sino que también es como “el arsenal de los pobres, el repertorio de gestos, acciones –implícita o explícitamente impugnativos de la vida cotidiana de los subalternos–, interpretados como una infrapolítica de

los desvalidos”³. Por su parte, Bonfil, al analizarla más en el contexto de los pueblos indios, señala: “el México profundo... resiste apelando a las estrategias más diversas según las circunstancias de dominación a que es sometido... Las formas de resistir han sido muy variadas; desde la defensa armada y la rebelión hasta el apego aparentemente conservador a las prácticas tradicionales”⁴.

No problematizaremos más el concepto y adoptaremos la postura de Héau Lambert en el sentido de que tanto Scott como Bonfil plantean la misma problemática de la resistencia de los oprimidos en la larga duración, mediante tácticas y estrategias cotidianas de supervivencia que resultan ser, en el fondo, rechazos e impugnaciones de las relaciones de poder que padecen y que pueden adoptar muy diversas formas⁵.

Nuestra perspectiva de análisis es que, ante esta sucesión de formas de subordinación y exclusión, los campesinos mexicanos han implementado toda una sucesión de formas de resistencia: activa, pasiva, a veces armada, a veces pacífica, muchas veces colectiva y otras sólo individual o familiar. Veamos las que se han desplegado durante estas tres décadas de ajuste estructural.

Los movimientos y las luchas

Durante la época de la sustitución de importaciones, la resistencia campesina se expresó sobre todo a través del movimiento de lucha por la tierra pues, dado que era su recurso esencial para la reproducción, generaba una gran disputa entre los actores sociales. De 1940 a 1970, se realizó un movimiento por la tierra de carácter regional, en parte debido a las acciones represivas del Estado. Al calor de la toma de tierras de los latifundios todavía existentes, se fundaron organizaciones como la UGOCM (Unión General de Obreros y Campesinos de México), con gran presencia en el norte del país, y movimientos guerrilleros como el de Rubén Jaramillo, en Morelos, en los años cincuenta. Asimismo, las luchas por la tierra en 15 estados de la República favorecieron el nacimiento de la Central Campesina Independiente (CCI) en 1963. Y en esa misma década estallaron otros movimientos de guerrilla también reivindicando la lucha por la tierra, encabezados por Genaro Vázquez y Lucio

² Maxime Haubert y Gabriel Torres. *Desenlace de las crisis y ajustes al modelo de desarrollo*. Revista de la Universidad de Guadalajara, primavera 2003.

³ James C. Scott citado por Catherine Heau Lambert. “Resistencia y/o Revolución”. *Teoría Política*, año 1, núm. 2, marzo de 2007, pp. 56 y ss.

⁴ Guillermo Bonfil citado por Heau Lambert, *op. cit.*

⁵ *Ibid.*, p. 60.

Cabañas, en Guerrero, y el grupo que asalta el cuartel de Madera, en Chihuahua, en 1965⁶. En los años setenta, la lucha por la tierra adquirió dimensiones nacionales y por doquier surgieron movimientos, muchos de los cuales terminaron en ocupaciones y tomas generalizadas, tanto en el noroeste del país como en el sur y el centro. De aquí surgieron dos organizaciones nacionales importantes: la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Sin embargo, al cambiar la forma de subordinación del campo, se debilitaron las anteriores organizaciones y el Estado lanzó la ofensiva del ajuste neoliberal, y las revueltas campesinas y rurales, en general, adoptaron muy diversas formas. Enseguida realizamos una agrupación a la vez por periodo y por tipo de demandas de los movimientos.

Las luchas por los precios de garantía y la apropiación del proceso productivo: 1983-1990

Estas luchas surgen cuando el Estado comienza a replegarse de su papel como rector e impulsor de la producción de alimentos y materias primas. Entonces surgen organizaciones que buscan apropiarse del proceso productivo en todas sus fases: para el financiamiento y el aseguramiento, para la producción, para el abasto, para la comercialización de las cosechas. Un ejemplo claro de ellas es la UNORCA: Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Las movilizaciones en este periodo tienen como demandas básicas el aumento de los precios de garantía y el apoyo del Estado para las organizaciones que se apropian de diversas fases del proceso productivo⁷.

Precios de garantía. En 1985, al estancarse los precios de los granos básicos y dispararse los de los insumos merced a la nueva política económica, surgen en varias partes del país movimientos para incrementar los precios de garantía, sobre todo del maíz y el frijol. Las movilizaciones comienzan en Nayarit en 1983 y se extienden a ocho estados de la República. El siguiente año, se dan principalmente en los extremos del país: con los maiceros de la zona centro de Chiapas y los maiceros y frijoleros de la agricultura de temporal del noroeste de Chihuahua. No obstante, el Estado maneja diferenciadamente ambos movimientos: a los dirigentes de los primeros los lleva a prisión y no accede a

sus demandas, en tanto que los temporaleros chihuahuenses, aglutinados primero en el Movimiento Democrático Campesino (1985-1986) y luego en el Frente Democrático Campesino, aprovechan la coyuntura de insurgencia electoral para lograr incrementos, así sea regionales, a los precios de sus cosechas.

Las luchas por la "apropiación del proceso productivo". Se dan a fines de los noventa y principios de los ochenta. Sus protagonistas son organizaciones nuevas, como la UNORCA, y sus movilizaciones están muy ligadas a los precios de los productos del campo, el crédito, el seguro la comercialización; una de las más importantes es la que se realiza la segunda quincena de octubre de 1990, cuando cerca de diez mil campesinos del noroeste, el Bajío y el sur marchan rumbo a la Ciudad de México. La inicia la UNORCA, pero se suman luego la CIOAC, la UGOCP, la Alianza Campesina del Noroeste y algunos grupos de la CNC; sus demandas principales son: precio justo a sus cosechas de maíz, soya, sorgo y arroz; reestructuración de carteras vencidas con Banrural; políticas financieras para fortalecer las uniones de crédito campesino; y transición pactada entre las organizaciones campesinas y el Estado de la política de subsidios y de la transferencia de los aparatos de fomento estatal al campo.

El movimiento contra la regresión agraria del salinismo: 1989-1993

Desde agosto de 1989, previendo ya el giro antiagrarista de la política de Salinas de Gortari, 27 organizaciones campesinas del país se reunieron con el propósito de integrar un frente común contra la política agraria del gobierno federal. El congreso que agrupó al frente se celebró en Cuautla, Morelos, y en él se denunció que el gobierno de Salinas pretendía imponer una serie de reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Reforma Agraria que conducirán a la privatización del ejido, y llamaron a movilizarse para impedirlo.

En noviembre de 1991, el presidente Carlos Salinas de Gortari anunció su iniciativa de reformar el Artículo 27 de la Constitución General de la República, que abre la posibilidad de privatizar el ejido y permitir la asociación de los ejidatarios con corporaciones y compañías por acciones. De inmediato, muy diversas organizaciones anunciaron su tajante rechazo a la iniciativa.

Las movilizaciones nacionales contra la *contrarreforma* salinista se dieron, primero, en el marco del Consejo de Anenecuilco, y luego dentro del Movimiento Nacional de Resistencia Campesina (Monarca), durante lo que resta

⁶ Armando Bartra, *Los herederos de Zapata*. México: Era, 1985, pp. 93 y ss.

⁷ Blanca Rubio, *op. cit.*, pp. 88 y ss.

de 1991 y algunos meses de 1992. Sin embargo, el apoyo abierto de la CNC y otras organizaciones afines a ella, al proyecto de Carlos Salinas, así como toda una ofensiva mediática del gobierno y sus aliados, sobre todo del PAN, terminaron venciendo la resistencia de las organizaciones campesinas independientes y la contrarreforma agraria terminó promulgándose.

Las movilizaciones anteriores a la firma del TLCAN

Desde que se anunció la posibilidad de que se firmara el tratado, diversas organizaciones sociales empezaron a estudiar sus implicaciones, a discutirlos y pronunciarse al respecto. Destaca entre ellas el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH) al cual, y a pesar de no ser una organización con presencia nacional, su cercanía con la frontera con Estados Unidos, sus relaciones con organizaciones rurales de ese país y la experiencia de muchos de sus asociados de trabajar temporalmente ahí lo hicieron especialmente sensible al tema del TLCAN.

El 28 y 29 de octubre de 1991, en la ciudad de Zacatecas, en el centro del país, de manera paralela a la tercera ronda interministerial de negociaciones sobre el TLCAN que celebran los ministros de comercio y economía de los tres países, se reunieron en un foro un gran número de organizaciones sociales de todo el país y anunciaron la formación de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), a la que se integraron varias organizaciones campesinas como la CIOAC y el FDCCH como miembros fundadores.

Desde entonces y hasta la entrada en vigor del TLCAN, pocas fueron las movilizaciones campesinas que se llevaron a cabo, sólo el FDCCH tomó los puentes internacionales en octubre de 1993 y realizó una manifestación en el Puente de Santa Fe, en Ciudad Juárez, el 16 de noviembre de ese año, día en que el tratado se votó en el congreso norteamericano. Buena parte de la débil respuesta a esa forma de integración es que Salinas cooptó a parte del movimiento campesino, ya sea a través del Consejo Agrario Permanente o a través de diversos convenios de concertación con las organizaciones campesinas.

El Barzón: gran movimiento de las clases medias rurales: 1993-1998

Sin embargo, la crisis se gestó en el seno de la economía nacional y estalló a fines de 1994, pero empezó a manifes-

tarse en 1992 en el eslabón más débil: el campo. Desde este último año, empezaron a darse en Chihuahua diversas manifestaciones de inconformidad de agricultores medios ante el problema de la *cartera vencida*, es decir, de los créditos bancarios que los agricultores habían dejado de pagar por un periodo de tiempo mayor que el tolerado por los bancos.

En agosto de 1993, surgió en Guadalajara, Jalisco, el movimiento de productores agropecuarios deudores de la banca que se autodenominó *El Barzón*; en este lugar lo encabezó Maximiano Barbosa, y luego se inició en Zacatecas bajo la dirección de Alfonso Ramírez Cuéllar y Juan José Quirino. Aunque tiene antecedentes claros en los estados de Sonora y Chihuahua, no es sino en Jalisco, en el centro occidente del país, donde se conformó como movimiento nacional y definió con claridad sus demandas fundamentales: reestructuración de los adeudos, quita de buena parte de los intereses, reducción de tasas y créditos frescos, principalmente.

La lucha de *El Barzón*, que luego se escindió en al menos dos corrientes, constituye el principal movimiento social del México rural en 1993, y, junto con el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue el movimiento más significativo de toda la década de los noventa, sobre todo una vez que en 1994 empezaron a aglutinar también a deudores de créditos hipotecarios y de tarjetas de crédito en el medio urbano.

El *Barzón* se amplió por todo el país y se diversificó gracias a la caída en cartera vencida de cientos de miles de deudores de créditos hipotecarios, de créditos automotrices o de pequeños negocios; incrementó enormemente su base social y se convirtió en el movimiento social más importante de esos años en México. Diversificó enormemente sus formas de lucha: toma de bancos, cadenas telefónicas de alerta, acciones para impedir embargos y desalojos, recuperación de bienes embargados, etc., aunque luego se dividió y tendió a identificarse más partidariamente. Su fuerza y capacidad de convocatoria fueron determinantes para que cientos de miles de mexicanos conservaran su patrimonio y para que el gobierno federal pusiera en marcha varios programas de apoyo a deudores⁸. Aunque ya no tiene la presencia de antes, *El Barzón* se ha convertido en una de las organizaciones más importantes del campo mexicano

⁸ Para una amplia historia de *El Barzón*, véase el libro ya citado de Hubert Canton de Grammont, *El Barzón, clase media, ciudadanía y democracia*. México: IIS/Plaza y Valdés, 2001.

y en un referente obligado de las clases medias y de los pequeños empresarios agropecuarios.

La irrupción del EZLN

El 1° de enero de 1994, luego de un largo y paciente proceso de gestación e integración en el medio de las comunidades indígenas de Chiapas, hizo su aparición armada el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la rebelión más clara, simbólica y concientizadora del público sobre el TLCAN y sus efectos, precisamente el día en que éste entró en vigor. Aunque el levantamiento armado duró escasos días, su impacto en la sociedad mexicana, los procesos que inició de convocatoria a la sociedad civil, de exigencia al gobierno para iniciar los Diálogos de San Andrés de los Pobres, influyeron decisivamente en los movimientos campesinos de los años subsecuentes por sus formas de lucha, su contenido, su forma de dialogar y de negociar.

El análisis del EZLN y del movimiento indígena que propició exceden con mucho las pretensiones de este artículo. Sin embargo, es indudable que la relación que el movimiento zapatista ha tenido con el resto de los movimientos campesinos es un tema muy poco estudiado, pero es necesario que se retome desde la perspectiva de ambos.

Reflexión para fin de los noventa

Van a ser estos factores: transición a la democracia en el medio político, profundización de las políticas de ajuste en el campo y cambio en los interlocutores rurales privilegiados por el régimen, los que van a configurar de manera muy diferente la estructura de oportunidades política en el medio rural mexicano de los años anteriores. En efecto, tanto por lo agresivo que resultó el nuevo modelo agrícola promovido por Salinas y Zedillo contra los pequeños y medianos productores, como por la ineffectividad de las organizaciones oficialistas y las que se acercaron al régimen para contrarrestar las nuevas políticas agrícolas y la apertura comercial, se va a redefinir el mapa de los actores sociales y políticos en el medio rural. Hay un debilitamiento de la CNC y de las organizaciones cercanas al PRI, así como de las organizaciones que participan en el Consejo Agrario Permanente, el cual pierde un enorme peso específico. Así se fortalecen nuevas organizaciones precisamente por su combatividad a las reformas neoliberales: El Barzón, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), la Asociación Nacional de Empresas Comerciali-

zadoras del Campo (ANEC), el mismo Frente Democrático Campesino y otras⁹.

Las movilizaciones por el presupuesto rural: 1998 y la “Cabalgata por el Campo”

Estos nuevos actores rurales comenzaron nuevas formas de lucha favorecidas precisamente por el contexto de mayor pluralidad política y de incipiente división de poderes. Denunciaron con toda claridad los enormes perjuicios causados a los campesinos, pequeños y medianos productores y, en general, a la agricultura nacional, por las políticas de ajuste en el campo. También iniciaron una práctica que ya se ha hecho institucional cada año: las movilizaciones campesinas y el cabildeo en la Cámara de Diputados para lograr incidir en el presupuesto que ésta asigna para el sector agropecuario, a partir de la propuesta del Ejecutivo federal. Las primeras acciones se dieron en torno al presupuesto rural de 1999, en el otoño de 1998, y de ahí en adelante se tornaron en una práctica sistemática de las organizaciones campesinas.

En el otoño de 1998, diversas organizaciones campesinas comenzaron una nueva modalidad de lucha que desde entonces se lleva a cabo año con año, por el presupuesto rural, es decir, para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión incremente el presupuesto asignado para el campo. En 1999 las organizaciones pidieron un aumento de 22 mil a 35 mil millones de pesos para el año 2000, y que 60% del mismo se canalice al desarrollo productivo y 25% a las organizaciones campesinas, así como una mejor y más justa distribución del Procampo y que se reactive el crédito al campo.

Simultáneamente, en octubre de 1999, un contingente de El Barzón Chihuahua y El Barzón Federación, desde Ciudad Juárez, emprendieron una “Cabalgata por la Dignidad del Campo” para exigir el rescate y la dignificación de la agricultura nacional. Recorrieron dos mil kilómetros para ingresar a la Ciudad de México en diciembre del mismo año. Ahí confluyeron con las manifestaciones de las organizaciones campesinas en pro del incremento al presupuesto rural.

La movilización tuvo relativo éxito, pues el presupuesto de egresos para agricultura, ganadería y desarrollo rural

⁹ *Ibid.*, pp. 45-46.

se fijó en 25 mil 769 millones de pesos, poco más de 8% superior al presupuesto ejercido en 1999¹⁰.

En diciembre de 2000, las organizaciones volvieron a la carga, exigiendo un nuevo incremento al presupuesto rural, y lograron aumentarlo de 26 mil 793 millones programados por el Ejecutivo federal a 31 mil 60 millones, un incremento de cuatro mil 107 millones de pesos¹¹.

Desde comienzos del verano de 2001, se inició a nivel nacional un fuerte ciclo de movilizaciones de diversas organizaciones campesinas en torno a varias demandas. Los productores de maíz de Sinaloa, los arroceros de Campeche, los productores de sorgo de Tamaulipas, los productores de piña de Oaxaca y Veracruz, todos clamaban por mejores precios a sus productos, por canales ágiles de comercialización y por el control estricto de las importaciones que les hacen competencia desleal¹².

La reactivación campesina de inicios del milenio

A ocho meses de que Vicente Fox asumió el gobierno, en el verano de 2001, la rebeldía de los campesinos contra su política agropecuaria se multiplicó por todo el país y se declaró la “guerra” al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Hubo movilizaciones de protesta en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Distrito Federal, Michoacán, Nayarit, entre otros. Incluyeron tomas de secretarías de Estado en la capital, de oficinas públicas en distintas entidades de la República, de ingenios azucareros, instalaciones de Pemex, bodegas almacenadoras de granos, puentes fronterizos, así como confiscación de productos extranjeros y bloqueos de carreteras y mítines.¹³ Todo esto preparó el terreno para la emergencia del movimiento campesino más importante de las últimas décadas, el movimiento *El Campo No Aguanta Más* (noviembre 2002-abril 2003).

¹⁰ María Amparo Casar, Eduardo Revilla Martínez y Juan Pablo Guerrero Amparán. *Algunos aspectos relevantes del presupuesto 2000*. México: CIDE. Recuperado de <http://www.presupuestoygastopublico.org/documentos/presupuesto/aspectos_relevantes_2000.pdf>.

¹¹ Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Consultado en el sitio internet: <<http://www.cefp.gob.mx/modpef99-05/pdf/pef2001.pdf>>.

¹² *El Financiero*. México, D.F., 23 de julio de 2001, nota de Héctor Silva.

¹³ *El Diario*. Chihuahua, Chihuahua, 31 de julio de 2001.

El 3 de agosto de 2001 se constituyó en el municipio de Guasave, en Sinaloa, el Frente para la Defensa de los Productores Agropecuarios con campesinos de los estados de Sinaloa, Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas y Chihuahua. El frente quedó integrado por miembros de la Liga de Comunidades Agrarias, de la Confederación Nacional Campesina, el Comité Pro Mejoramiento del Agro del Noroeste de Chihuahua, El Barzón Chihuahua, El Barzón nacional, el Frente Democrático Campesino, la Confederación Nacional Campesina en Ahome, Sinaloa, el Frente para la Defensa de los Productores Agropecuarios de Sinaloa y la Organización Regional Campesina Autónoma, de Sonora. Además, lo integran productores del Valle de San Lorenzo, Sinaloa, de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Laguna, que integra a productores de Durango y Coahuila, así como de la Central Campesina Cardenista de Zacatecas, en representación de las organizaciones de Chihuahua¹⁴.

El 14 de agosto de 2001, cientos de campesinos de Chihuahua, Sinaloa y Sonora cerraron por tres horas uno de los puentes internacionales de esta ciudad fronteriza que comunica con El Paso, y detuvieron camiones de carga provenientes de Estados Unidos como parte de las movilizaciones que realizaban por todo el país, para exigir que se modificara la política agropecuaria que desde 1982 habían impuesto los priistas y que el gobierno foxista había seguido fielmente. Los representantes del Frente Nacional para la Defensa de Productores Agropecuarios hicieron contacto vía telefónica con la Presidencia de la República para notificar de su acción y exigir que el Ejecutivo federal tomara en cuenta sus demandas, propuestas y se reuniera con ellos. Las propuestas centrales que lograron unificarlos fueron: reducir 50% el precio del diesel para uso agrícola, así como de los fertilizantes y las tarifas eléctricas para pozos de riego, con miras a comenzar a nivelar las condiciones entre los productores mexicanos y los estadounidenses. Igualmente, pugnaron por el control efectivo de las importaciones de productos agropecuarios, mediante la participación directa de los productores en los comités de cupos, y por la atención eficaz a los problemas de financiamiento agropecuario y a la cartera vencida del sector¹⁵.

Luego de permanecer 24 horas en la frontera, los campesinos del frente se retiraron, pero las organizaciones de Chihuahua reemprendieron la lucha el 30 de agosto, cuando

¹⁴ Archivo personal de Víctor Quintana.

¹⁵ *La Jornada*. México, D.F., 15 de agosto de 2001.

tomaron las instalaciones y los tanques de almacenamiento de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), para seguir presionando por la solución de sus demandas. Al mismo tiempo, hubo protestas del Frente para la Defensa de Productores Agropecuarios en la capital de la República y en el puerto de Veracruz, a las que asistió una representación simbólica de campesinos chihuahuenses¹⁶.

Aunque este Frente para la Defensa de los Productores Agropecuarios no se desintegró, fue perdiendo fuerza, pues algunas organizaciones prefirieron movilizarse en lo regional y se dispersaron. Sin embargo, las movilizaciones conjuntas de estos meses fueron preparando las condiciones para la emergencia de un nuevo y robusto movimiento.

El movimiento *El Campo No Aguanta Más*: 2002-2003

La expresión más acabada de resistencia y de propuestas de alternativas al modelo dominante de políticas económicas de ajuste lo constituye el movimiento que se despliega en México desde fines de 2002 y que se dio en llamar *El Campo No Aguanta Más*.

Arranque del movimiento. El 12 de octubre de 2002, el país se llenó de acciones de protesta contra el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), considerado por las organizaciones campesinas y populares como la extensión del TLCAN a toda América. Se tomaron puentes internacionales, se realizaron bloqueos de carreteras y se organizaron marchas y plantones con la consigna unánime: "No al ALCA".

El 12 de noviembre de 2002, se llevó a cabo una reunión de 12 organizaciones campesinas en la Ciudad de México. Como resultado de dicha reunión, se presentó un manifiesto titulado *Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano*. Las propuestas son: moratoria al capítulo agropecuario del TLCAN, un programa emergente para el campo 2003 y a largo plazo a 2020, por una verdadera reforma financiera rural, reconocimiento a los derechos y a la cultura de los pueblos indios, entre otros¹⁷.

Signaron el documento las organizaciones: Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo

(ANEC), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Unión Nacional de Organizaciones Comunitarias en Forestería (UNOFOC), Coordinadora Estatal de Productores de Café Orgánico de Oaxaca (CEPCO), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), el Frente Nacional de Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), la Red MOCAF (Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales) y el Frente Democrático Campesino (FDC). El manifiesto comenzaba con la frase *El campo mexicano no aguanta más*, y una periodista bautizó así al agrupamiento de organizaciones que lo suscribían. A partir de ahí, el movimiento sería conocido como tal.

Primera etapa: los combates en el Legislativo. Desde el 3 de diciembre de 2002 y hasta bien avanzado dicho mes, las organizaciones anteriores a las que luego se sumarán El Barzón y el CAP, realizaron intensas movilizaciones y cabildeo ante el Legislativo para lograr que, cuando menos, en el caso del TLCAN las cosas se quedaran como estaban y no se iniciara la nueva etapa el 1° de enero de 2003. Acudieron también a la Embajada de Estados Unidos para hacer sus planteamientos.

Segunda etapa: las grandes movilizaciones de enero de 2003. En el primer minuto del 1° de enero, un contingente del Frente Democrático Campesino, acompañado por líderes de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), de la Organización Popular Independiente, de las Comunidades Eclesiales de Base, estas últimas de Ciudad Juárez, y de las organizaciones de El Paso, Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera (UTAF), y de la Unión de Trabajadores Fronterizos, se instalaron en el Puente Internacional Córdoba-Américas o Puente Libre, entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y dieron lectura al *Manifiesto de Ciudad Juárez*. En esta proclama se retomaron las demandas fundamentales del movimiento El Campo no Aguanta Más y se lanzó la iniciativa de iniciar un *Diálogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano*, con una convocatoria amplia para todos los sectores sociales y políticos.

Los dirigentes del FDC y de la ANEC se declararon en ayuno y llamaron a la ciudadanía a sumarse a la demanda de moratoria al TLCAN en materia agropecuaria. Desde la mañana del día 1°, numerosas personas de muy diversas

¹⁶ *El Diario*. Chihuahua, Chihuahua, 31 de agosto de 2001, nota de García y D. García.

¹⁷ Movimiento El Campo No Aguanta Más, *Seis propuestas para la salvación y la revalorización del campo mexicano*, documento privado, México, 2002.

organizaciones sociales se dieron cita en el Puente Libre para solidarizarse con los campesinos. Luego se sumaron a la acción contingentes de la UNORCA del estado de Durango y Sonora. Al mismo tiempo, se realizaron acciones de protesta en otras partes de la República por parte de la CNPA, en Morelos y en Zacatecas¹⁸.

El plantón-ayuno en el Puente Libre logra una gran difusión nacional e internacional. Esto obliga al Gobierno Federal a apresurar las negociaciones y llama a las diversas organizaciones a dialogar el lunes 6 de enero de 2003. El 6 de enero se realiza en Los Pinos una gran reunión entre el Gobierno Federal y las organizaciones rurales. Preside Vicente Fox, acompañado por su gabinete. El Presidente ofrece iniciar un diálogo para buscar soluciones a la problemática del campo. La representación del CAP lo acepta sin condiciones. Por su parte, la representación del movimiento El Campo no Aguanta Más plantea como condiciones de dicho diálogo “señales claras de que el gobierno va a renegociar el TLCAN en materia agropecuaria” y el “cese de acciones penales contra campesinos y sus dirigentes”¹⁹.

El mismo día, la UNORCA inició un ayuno en el Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, y se convocó a la realización de actos similares en otras partes de la República. El 16 de enero culminó el ayuno con la celebración en el Museo de la Ciudad de México del Diálogo Nacional para la Salvación del Campo, con la participación de numerosos intelectuales, artistas y líderes de opinión. El 20 de enero, en muy diversas entidades de la República, se celebró una gran jornada de movilización y protesta. Muy diversos sectores externaron su apoyo al movimiento, entre ellos, el Frente Sindical Mexicano y la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano.

El 31 de enero convergen en la Ciudad de México contingentes de todos los rumbos del país. Los más numerosos al principio son los de las organizaciones del movimiento El Campo No Aguanta Más, e integra también un nutrido contingente del CAP. Al partir la marcha se suman las organizaciones sindicales y organizaciones urbano-populares. Luego se integra un contingente de más de tres mil gentes

¹⁸ El Campo No Aguanta Más, 2003.

¹⁹ *Idem*.

de la CNC²⁰ [...] Se culmina con un combativo mitin en el Zócalo lleno²¹.

Tercera etapa: el Diálogo Nacional por el Campo. La fuerza demostrada en la manifestación del 31 de mayo hace que el Gobierno se apresure a buscar la negociación. Se forma un comité conjunto de organización y negociación con representación paritaria del Gobierno Federal y los cuatro agrupamientos campesinos. Lo encabeza la Secretaría de Gobernación. En el seno del mismo, se acuerda realizar ocho mesas de diálogo. Se acuerda iniciar la primera mesa el lunes 10 de febrero en el Archivo General de la Nación. Las mesas de diálogo resultan muy ricas en convocatoria y en participación. Además de las cerca de dos mil ponencias que se presentan, hay una importante representación de regiones, sectores y organizaciones campesinas.

Los agrupamientos campesinos inician el lunes 17 de marzo un trabajo de armonización de sus propios resúmenes en busca de la elaboración de un proyecto común. Luego de intensas sesiones, lo logran y con fecha del 24 de marzo publican su documento: propuesta de un acuerdo nacional para el campo: por el desarrollo de la sociedad rural y la soberanía alimentaria, con campesinos como elementos fundamentales del proyecto de nación de México en el siglo XXI. Es una visión unitaria de las muy diversas organizaciones rurales. Se logran zanjar años de profundas diferencias y desacuerdos. Es un aporte no sólo crítico a la situación actual del campo en México, sino a los efectos de las políticas económicas de ajuste en el agro, pero a la vez es un documento que plantea un modelo diferente, una alternativa de proyecto de nación, propuesta desde el campo. Viene a ser un verdadero Plan Campesino para el Siglo XXI.

Sin embargo, ese documento se erosiona mucho al negociar las organizaciones campesinas con el gobierno. Se va debilitando en el contenido porque el gobierno logra dividir las, sobre todo separar a la CNC y al CAP, además de que la cercanía de las elecciones federales presiona para que lo suscriban. Así, a mediados de abril de 2003, se elabora el borrador del Acuerdo Nacional para el Campo entre el gobierno de Vicente Fox y las organizaciones campesinas.

²⁰ La CNC es la Confederación Nacional Campesina, una organización formada en los años treinta desde el gobierno para ejercer un control corporativo sobre el campesinado. Siempre ha pertenecido al oficialista (al menos hasta el año 2000) Partido Revolucionario Institucional, PRI.

²¹ Véase la crónica de la manifestación en los diarios de la Ciudad de México, sobre todo en *La Jornada, El Universal y Reforma*, del 1º de febrero de 2003.

Cuarta etapa: el Acuerdo Nacional para el Campo y las acciones posteriores. El lunes 28 de abril, en el Palacio Nacional, el presidente Fox, los secretarios de Gobernación, Agricultura, Economía y Reforma Agraria firman el Acuerdo Nacional para el Campo. Por las organizaciones campesinas, la CNC, el CAP, El Barzón y ocho de las 12 organizaciones del movimiento El Campo no Aguanta Más. No asisten ni lo suscriben la UNORCA, el FDCHH y la UNOFOC.

El 6 de mayo se constituye la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo con representantes del gobierno y de las organizaciones; sin embargo, esta comisión sufre un rápido desgaste porque no hay disposición de aquél para atender las demandas esenciales sobre el modelo de desarrollo para el campo.

A pesar de ello, se logra un impacto significativo en la política del gobierno mexicano ante las negociaciones de la Ronda de Cancún de la Organización Mundial del Comercio, en septiembre de 2003. Desde antes de la celebración de la reunión ministerial en esa playa del Caribe, la postura del movimiento El Campo No Aguanta Más incide en la decisión del gobierno de Vicente Fox de que México ingrese al Grupo de los 20 (G-20) que, entre otros países, está integrado por Brasil, Argentina y la India, y que exige el retiro de los subsidios a las exportaciones agropecuarias y de las ayudas gubernamentales internas a la agricultura por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Durante la celebración de la reunión ministerial en Cancún, la primera semana de septiembre, las organizaciones de El Campo No Aguanta Más y las organizaciones campesinas de otros países, aglutinadas en la Vía Campesina, realizan fuertes acciones de protesta en diversos sitios de la ciudad. Finalmente, la reunión de Cancún fracasa, pues al no ceder Estados Unidos y la Unión Europea en el tema de los subsidios agrícolas, las negociaciones en otros temas también se derrumban.

Otro logro político es que los productores agropecuarios organizados hacen que se aplique la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se les reconozca la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas públicas, tanto a nivel nacional en el Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustentable como a nivel estatal y municipal en los consejos respectivos. Pero tal vez uno de los logros más importantes del movimiento es que, a nivel nacional, se rompe el papel hegemónico de la CNC como aglutinadora y representante de los intereses de los agricultores de todo tipo, y que se coloca en la agenda nacional el problema del campo. Y no sólo eso, sino que se impacta positivamente en la opinión pública, la cual, en una encuesta de finales de enero de 2008,

se declara, en 70%, “favorable” a la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria.

La crisis de la tortilla, la campaña “Sin maíz no hay país” y la nueva resistencia campesina

A un mes escaso de haber llegado a la Presidencia de la República, Felipe Calderón enfrentó la primera crisis de su sexenio: la llamada “crisis de la tortilla”, pues de diciembre de 2006 a las primeras semanas de enero de 2007, el precio del alimento básico de las clases populares escaló de \$6 a \$10 el kilo. Antes, el 20 de ese mes, Calderón había promovido un “pacto” entre el gobierno federal, las grandes empresas fabricantes de harina de maíz y cinco mil tornilleros, para “estabilizar” el precio a \$8.50 el kilo: un incremento de 41.6% en relación con el precio de diciembre: diez veces más que el aumento a los salarios mínimos, que no llegó a 4%²².

El incremento golpeó fuertemente a los consumidores, sobre todo de las clases populares. La crisis de la tortilla reveló lo equivocado de la estrategia agroalimentaria de los últimos gobiernos. Cuando se terminó a nivel internacional el ciclo de los granos básicos baratos, la especulación de los acaparadores se desató y la tortilla escaló precios que hacen trizas cualquier aumento al salario mínimo. Entonces el gobierno federal, a través del secretario de Economía, Eduardo Sojo, reconoció que “no dispone de instrumentos para controlar el precio”, pues los desmanteló con toda su política alimentaria desde los años noventa.

Las organizaciones campesinas a nivel nacional empezaron a movilizarse a la vez que criticaban las políticas del gobierno en lo referente a los granos y alimentos básicos, y fustigaron el “pacto de estabilización del precio de la tortilla” celebrado por el gobierno federal y la cúpula agroempresarial. Organizaciones como la Conoc, la UNORCA, la CNPA, la ANPAP y el Frente Democrático Campesino ofrecieron una serie de propuestas para solucionar de manera definitiva el problema de la carestía de tortilla y maíz y, en general, para construir la soberanía alimentaria del país.

El 25 de junio de 2007 se lanzó la campaña “Pon a México en tu boca-Sin maíz no hay país”, promovida por más de un centenar de agrupaciones campesinas aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

²² Víctor M. Quintana S. *Crisis de la tortilla, crisis del modelo*. Publicado en internet en <<http://colobiareport.ss.uci.edu/webdocs/crisisdelatortilla.pdf>>.

(CNOG), entre ellas las chihuahuenses Frente Democrático Campesino y El Barzón. El grito de arranque del eslogan lo dio la escritora Laura Esquivel, autora del clásico literario gastronómico *Como agua para chocolate*. La campaña tuvo cinco demandas fundamentales:

1. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN. Instalar un mecanismo permanente de administración de las importaciones y exportaciones de maíz y frijol (y sus derivados y subproductos) por el Congreso de la Unión.
2. Prohibir la siembra de maíz transgénico en México.
3. Aprobación del Derecho Constitucional a la Alimentación por parte de la Cámara de Diputados y la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores.
4. Luchar contra los monopolios del sector agroalimentario.
5. Promover que el maíz mexicano y las expresiones culturales que involucra se inscriban tan pronto como sea posible en la Lista de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.

La campaña comenzó a recibir la adhesión de artistas, intelectuales y organizaciones sociales, y se replicó en varias entidades. Hay que destacar el acierto de esta campaña en el manejo de aspectos antes algo descuidados: la lucha cultural y las manifestaciones artísticas.

El primer minuto de 2008, fecha en que se inició la total desgravación de la importación de maíz, frijol y leche en polvo, en el marco del TLCAN, el FDCCH, El Barzón y representantes de la ANEC, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y otras organizaciones integrantes de la campaña “Sin maíz no hay país” y de la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera, tomaron el puente internacional Córdova-Américas que une a Ciudad Juárez con El Paso, Texas, para protestar por entrar en vigor la penúltima etapa de liberación de dicho tratado.

En la “joroba” del puente, signaron y proclamaron el llamado Plan del Chamizal. Esta iniciativa –definida como un símil, guardando toda proporción histórica, del Plan de Ayala– es un llamado a la nación a unificarse para detener el desastre en el campo, defender la seguridad nacional –uno de cuyos ejes es la producción de alimentos suficientes para la población– y la gobernabilidad democrática del país²³.

Este documento, que comienza con la consigna: “Salvar al campo para salvar a México/Rescatar a la Nación para rescatar al campo”, inicia con un llamado a la nación desde el campo mexicano y a la campaña nacional *Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco*, para el rescate de la nación, la recuperación y el ejercicio cabal de nuestra independencia y soberanía popular y nacional, así como para la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho²⁴.

El documento denuncia la “política de guerra” emprendida los últimos 25 años por los gobiernos priistas y panistas en contra de los campesinos mexicanos, y señala que esto confirma “el carácter ilegítimo, antidemocrático y anticonstitucional del gobierno de Felipe Calderón”. Hace un balance del fracaso de la política neoliberal no sólo en el campo, sino en todos los aspectos de la vida del país. Asimismo, plantea una “agenda mínima común” de siete puntos, entre los que destacan: soberanía alimentaria y reactivación del campo, defensa de los recursos energéticos nacionales y contra las reformas de Felipe Calderón a las leyes del ISSSTE, el IMSS y en materia laboral, así como defensa de los derechos de los indígenas, de los migrantes y de los trabajadores agrícolas.

Termina convocando a todas las organizaciones sociales a una asamblea de articulación el 14 de enero y a “una Marcha Nacional por el Rescate de la Nación, los Derechos de los Trabajadores del Campo y la Ciudad y contra la Represión”, a celebrarse el 31 de enero en la Ciudad de México.

El 18 de enero de 2008, los campesinos participantes en la toma iniciaron una “tractorada” desde el mismo puente internacional hasta la Ciudad de México para apoyar el pliego de “Sin maíz no hay país”, a la vez que convocaron a la formación del “Movimiento Nacional de Resistencia Campesina Villa-Zapata”²⁵.

A lo largo de todo el recorrido de la caravana, le sobraron los apoyos de todo tipo por parte de comunidades y organizaciones campesinas: diesel para los tractores, así como comida, hospedaje y cálidas recepciones en los pueblos y ciudades.

Finalmente, el 31 de enero, luego de haber recorrido 2 mil kilómetros por la columna vertebral del país, el contingente neovillista llegó a la Ciudad de México y encabezó la gran marcha de organizaciones campesinas y sociales.

²³ *La Jornada*, 2 de enero de 2008, crónica de Matilde Pérez.

²⁴ Campaña “Sin maíz no hay país”, Plan del Chamizal, p. 1.

²⁵ *El Diario de Juárez*, 2 y 3 de enero de 2008.

En ella participaron alrededor de 200 mil personas de muy diversas organizaciones campesinas y sociales. La multitudinaria marcha la encabezaron los campesinos, primero los norteños de la caravana de tractores y les siguieron las coordinadoras y las organizaciones sindicales como el Frente Sindical Mexicano, la Unión Nacional de Trabajadores, y un contingente de la coordinadora Diálogo Nacional. Hubo una gran convergencia para exigir la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria, y acordaron formar un consejo nacional de organizaciones que luchara por conseguirlo, así como continuar juntos en el combate por impedir la privatización de los energéticos, la reforma laboral del gobierno y para lograr la derogación de la Ley del ISSSTE²⁶.

Aunque en esos momentos se evaluó que las jornadas de enero tuvieron logros importantes, el hecho es que no se obtuvo el objetivo principal, que era la renegociación del TLCAN. Así, se volvieron a formar mesas de negociación con el gobierno, pero éste logró desactivar las demandas principales y fue conformando algunas organizaciones con el acuerdo de financiarles convertirse en “Agencias locales de desarrollo”.

Es de destacarse que la campaña “Sin maíz no hay país” ha resultado en verdad un núcleo generador de movimientos desde su fundación en 2007 hasta la fecha. De ahí han surgido movilizaciones importantes contra los transgénicos, en defensa del maíz nativo y del patrimonio genético en general, por el rescate de la milpa y la cultura campesina que florece con ella; por mejores precios a los productores y a los consumidores del grano, por una nutrición adecuada para el pueblo de México, etc. Se trata de una campaña-movimiento que ha sabido conjugar los aportes de productores, investigadores, académicos, artistas, nutriólogos, comunicadores, y que ha tenido un importante efecto en la educación de la opinión pública y en ocasiones en su movilización también.

Las luchas de los incansables productores chihuahuenses

Ya sea por las difíciles condiciones agroclimáticas o por la no existencia de ventajas comparativas con la agricultura norteamericana, los productores del estado de Chihuahua

han mostrado todos estos años una gran capacidad de movilización, que muchas veces ha contagiado a otras regiones. En efecto, ellos comenzaron las protestas contra el TLCAN desde 1991 y el movimiento de las carteras vencidas desde 1993, pero no han sido las únicas, pues en los últimos diez años se han dado múltiples las luchas de estos pequeños, medianos y hasta grandes agricultores norteños:

- Contra las altas tarifas de la CFE para riego agrícola por bombeo y contra los cortes de la energía practicados a sus pozos.
- Contra la siembra del maíz transgénico localizado en algunas colonias menonitas.
- Por el pago de los apoyos de Aserca a la comercialización del maíz, el frijol y el algodón.
- Contra la importación de manzana norteamericana a precios de dumping.
- Para que Liconsa compre a precios competitivos la leche que producen.
- En contra de las alzas de precios de los insumos, fertilizantes, energéticos y maquinaria.

Estas luchas han sido plurales y diversas: participan en ellas El Barzón, el FDCCH, Agrodinámica Nacional, Comité Pro Mejoramiento del Agro, así como productores maiceros, frijoleros, ganaderos, lecheros, manzaneros, algodoneros, etc. Prácticamente no hay año de la década 2005-2015 que no haya generado una serie importante de movilizaciones.

Digresión necesaria: la acumulación por despojo en el campo mexicano

Con el avance de la globalización y de los intentos de Estados Unidos y sus aliados, la OTAN y empresas trasnacionales, por mantener un mundo unipolar a toda costa y salvar su hegemonía amenazada, se inició un nuevo ciclo para mantener y conservar la dominación ya no sólo a través del control de los alimentos, sino ahora también a través de la utilización de las riquezas naturales, como los recursos energéticos, los minerales, el agua, como “commodities” en los mercados financieros globales.

Por eso se hizo necesario para el neoliberalismo extractivista un nuevo marco institucional para la explotación económica de los espacios rurales y de dominación de los actores que en ellos operan, cuya lógica de base es la “acumulación por despojo”: despojo de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad, de los saberes comunitarios, de

²⁶ *La Jornada*, 1° de febrero de 2008, crónica de Matilde Pérez, Carolina Gómez y Gabriel León Zaragoza.

los derechos individuales y colectivos, etc., en aras de la urbanización desordenada, de los agronegocios, de los talamontes, de los proyectos turísticos y de los criminales organizados y de cuello blanco.

Este despojo característico de la “fase demencial del totalitarismo neoliberal”, como la llama el periodista argentino-canadiense Alberto Rabilotta, se hace posible legalmente por las 21 reformas constitucionales y de leyes secundarias en materia energética y las que habrá en la Ley de Aguas y la de Bioseguridad, entre otras. Este nuevo marco institucional consagra una nueva forma de explotación económica en el campo mexicano, cuyas principales implicaciones son: legalización del extractivismo como la actividad económica prioritaria en el campo: extracción de petróleo, gas natural, gas shale, aguas termales, de agua, simplemente, y de minerales, por sobre todo uso agrícola, ganadero o forestal del suelo. Despojo de los territorios a las comunidades, ejidos o propietarios bajo la forma de “ocupación temporal” o de “servidumbre energética”. Autorización del método de fragmentación hidráulica para la extracción de gas de lutita con los consiguientes daños ambientales y el agotamiento de acuíferos.

Ahí no termina la furia extractivista-entreguista del presidente Peña Nieto. Están pendientes otra serie de reformas para dar la última vuelta de tuerca a la reforma energética: a la Ley General de Aguas, que permitan una total desregulación para darle prioridad a los usos energéticos del agua: megapresas, geotermia, enfriamiento de centrales nucleares, *fracking*, etc. Reformas a otras leyes como la del Equilibrio Ambiental, la de Vida Silvestre, la de Desarrollo Forestal, la de Bioseguridad, para autorizar, entre otras cosas, la construcción de gasoductos en áreas naturales protegidas; además, quitar funciones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), facilitar la explotación de energéticos en selvas, humedales y suelos forestales, y autorizar la siembra de semillas transgénicas para la producción de bioenergéticas.

La respuesta campesina, indígena y de las comunidades al extractivismo y el despojo

Desde el inicio de esta fase ha habido importantes procesos de resistencia por parte de comunidades campesinas, indígenas, coordinadoras y organizaciones regionales y nacionales. En Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco y otras entidades han

emergido movimientos en defensa de los proyectos mineros, de las grandes presas, de la extracción o apropiación del agua superficial y de los acuíferos.

Cuando llega el gobierno de Peña Nieto y establece el “Pacto por México”, algunas organizaciones pidieron que se llevara a cabo un diálogo para acordar un “Pacto por el Campo”. Luego demandaron que se les escuchara antes de formular cualquier proyecto de reforma para el campo. Así, durante los meses de mayo, junio y julio de 2014, se llevaron a cabo ocho foros nacionales temáticos y siete foros regionales, además de foros estatales, donde participaron muy diversas organizaciones campesinas y los gobiernos federal y de los estados.

Sin embargo, la atropellada y atropellante aprobación de las 21 reformas legales que constituyen la reforma energética en el Congreso, durante los meses de junio y julio, indignó a los campesinos que promovieron una Gran Marcha Nacional Campesina en la Ciudad de México el 23 de julio de 2014. Ésta constituyó la manifestación más articulada y masiva de cualquier sector de la sociedad mexicana en contra de la Reforma Energética aprobada por el PRI, el PAN y sus aliados.

La manifestación logró arrancarle al gobierno una serie de mesas de diálogo para que los representantes campesinos plantearan sus propuestas para la reforma. Sin embargo, no todas las organizaciones aceptaron acudir a dichas mesas y paralelamente se convocó al *Encuentro y Jornadas por la Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida* para el 17 de agosto de ese año en el emblemático pueblo de San Salvador Atenco.

El evento fue todo un éxito tanto por el número de asistentes como por el ambiente y la inspiración que en él predominaron. De ahí surgió una estratégica y emotiva declaratoria que denunció la nueva fase del neoliberalismo en el campo mexicano con toda la estela de despojo que trae consigo.

A pesar de que desde hace casi ya dos años no ha habido otra movilización de la misma envergadura, las resistencias ante el nuevo modelo de despojo se han ido multiplicando y diversificando por todo el país por parte de las comunidades campesinas, indígenas, coordinadoras y organizaciones regionales y nacionales. En Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco y otras entidades han emergido movimientos en defensa de los proyectos mineros, de las grandes presas, de la extracción o apropiación del agua superficial y de los acuíferos, de cambio de política de mercados, etc.

Sólo algunos ejemplos de estas nuevas experiencias, muy diversas, de resistencia son:

- La Caravana Yaqui por la defensa del agua y el territorio de julio de 2015, que logró detener el proyecto del Acueducto Independencia en Sonora.
- La lucha contra el *fracking* o fracturación hidráulica, coordinada por la Alianza Mexicana contra el Fracking en diversas organizaciones de Puebla, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.
- La lucha de la Asamblea de Pueblos Macehuales, del Totonakú y Mestizos de 20 municipios de la región de Cuetzalan, Puebla, que se opone a los proyectos de minería, hidroeléctricas y extracción de gas por fractura hidráulica, que autoridades y transnacionales promueven en la entidad.
- La defensa de la cuenca del Río del Carmen en Chihuahua por parte de El Barzón y los ejidos de la zona, en contra de la extracción sin control de agua por parte de menonitas acaudalados, y en contra de la mina Mag Silver, que pretendía establecerse en el ejido Benito Juárez, Buenaventura. Este movimiento le costó la vida a los barzonistas Ismael Solorio y a su esposa, Manuelita Solís, así como al agricultor Alberto Almeida.
- El activismo de la coalición *Agua para Todos*, que ha logrado detener el proyecto de Ley General de Aguas, de Conagua, y difundir una propuesta alternativa.
- La campaña *Valor al campesino*, que logró incluir la creación del Programa S266, “Programa de apoyos a pequeños productores”, que busca apoyar a las unidades económicas rurales pequeñas para aprovechar el potencial del sector.
- El triunfo logrado en el juicio colectivo promovido por científicos, especialistas y campesinos al obtener la sentencia de apelación por la que ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, abstenerse de otorgar permisos de liberación o siembra de maíz transgénico hasta que se resuelva en definitiva dicho juicio colectivo.

Las policías comunitarias y algunas formas de autodefensa

El nuevo milenio ha significado, sobre todo desde fines de 2006 cuando Felipe Calderón lanzó su “guerra contra el narcotráfico”, una oleada de invasiones de efectivos del crimen organizado a varias regiones rurales del país. En ellas establecen el control casi total de amplias franjas de

territorio, cobran derecho de piso, secuestran, extorsionan, ejercen como autoridades y utilizan a la policía a su favor, y en otros casos se apoderan de los recursos naturales, como el hierro y la madera en Michoacán, las cosechas e importantes actividades comerciales.

Varias comunidades, sobre todo indígenas, han resistido a esas invasiones del crimen organizado creando las “Policías Comunitarias”, según sus usos y costumbres. Así ha sucedido en buena parte de la sierra de Guerrero y en comunidades michoacanas como Cherán y Ostula. Se trata de cuerpos elegidos y formados por miembros de la propia comunidad, independientes a los cuerpos policiacos oficiales; armados por ellas, vigilados por ellas, totalmente voluntarios, con los que han hecho frente a las fechorías del crimen organizado, muchas veces teniendo que soportar que asesinen a los comunitarios o que los encarcelen.

Se distinguen las policías comunitarias de las autodefensas en Michoacán porque éstas no surgen de comunidades indígenas en general. En muchos casos, se trata de ejércitos privados formados por uno o varios empresarios agrícolas para defender su patrimonio y sus cosechas. Buena parte de los efectivos están bajo sueldo de los patrones y muy bien equipados. En varios casos, entre las autodefensas se han detectado casos de complicidad con el Estado o el crimen organizado.

Además de toda esta riqueza de movimientos y de luchas, el arsenal de otras formas de resistencia de las comunidades campesinas e indígenas es muy diverso. Aquí sólo reseñamos algunas otras formas que han llevado a cabo para resistir.

La milpa de las resistencias

Proyectos de desarrollo-económico-productivo

Auspiciados por organizaciones campesinas, por pueblos indígenas, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, con instituciones educativas o de iglesia, con organismos de la cooperación internacional y hasta con dependencias de gobierno, surgen muchos proyectos que movilizan a las comunidades en proyectos de desarrollo alternativos al modelo dominante.

Estos esfuerzos han llegado a ser la avanzada del futuro en muchos aspectos. Por ejemplo, en el cultivo y la comercialización del café orgánico, donde la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras ha sembrado una rica experiencia. En el manejo comunitario y sustentable de los bosques, donde hay organizaciones como la Unión

Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (UNOFOC). En la operación y expansión de experiencias de economía solidaria o de ahorro y crédito alternativos, como la Unión de Esfuerzos para el Campo en Querétaro o la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS). En la organización para comercializar directamente sus productos, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC). Todas estas organizaciones constituyen verdaderas redes de comunidades, de proyectos campesinos tejidos desde abajo.

Cooperación y solidaridad desde abajo

Además de estos movimientos, se han ido construyendo desde abajo formas de cooperación y de solidaridad, tanto en lo económico como en lo social y lo político, que fortalecen la resistencia de las comunidades, les abren espacios de sobrevivencia y van construyendo un proyecto alternativo de globalización económica. Exponemos brevemente algunos de ellos:

- *Envío de remesas de migrantes.* Los recursos de los migrantes ya son la principal fuente de ingreso para el país, pues lo que envían los mexicanos radicados en Estados Unidos alcanzó en 2007 una cifra récord de 23 mil 979 millones de dólares. Según un estudio de la CEPAL, esas remesas las recibieron más de un millón de hogares, sobre todo en el campo, y representaron 77% de los ingresos de éstos. Aunque sigue predominando la informalidad en el envío de estas remesas, hay un creciente número de experiencias en que algún grupo de migrantes de la misma localidad de origen se organiza y envía sistemáticamente recursos financieros para ser utilizados en proyectos de desarrollo y generación de empleos en su comunidad de origen.
- *Constitución de organizaciones binacionales.* Algunos grupos van más allá del envío organizado de remesas para proyectos de ayuda o desarrollo. Llegan a plantearse la orientación, apoyo, defensa legal y capacitación de sus agremiados que emigran definitiva o temporalmente a Estados Unidos. Un caso muy exitoso es el del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB).
- *Constitución de alianzas y frentes multinacionales.* Los grupos campesinos se van vinculando más allá de las fronteras nacionales, participan en instancias como la Vía Campesina, en el Foro Social Mundial; o realizan movilizaciones conjuntas con organizaciones de otros países, por ejemplo, para oponerse al Área de Libre Comercio

de América del Norte (ALCA) o a la política agrícola de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Respuestas familiares y comunitarias

Las anteriores son respuestas planeadas y llevadas a cabo colectivamente, más allá de la unidad familiar. Pero hay todo un conjunto de respuestas, sobre todo de los ejidatarios, que se desarrollan en el contexto de la unidad familiar e incluso individualmente. Son diversas de acuerdo con la diversidad del campo mexicano; las dividimos en cuatro tipos²⁷:

- *Estrategias de autoconsumo y producción agropecuaria.* Los campesinos utilizan tácticas que minimizan el riesgo y generan ingresos complementarios: se refuerzan los cultivos tradicionales para la autosuficiencia de la familia: maíz, frijol y forrajes. Se refuerza también la actividad ganadera como complemento de la dieta familiar y como reserva económica. Disminuyen el uso de insumos y aplican las tecnologías de menor costo. Asimismo, aprovechan al máximo los diversos programas de gobierno.
- *Participación en mercados laborales.* Los campesinos participan más en actividades extra agrícolas: 60% de las familias rurales lo hizo en 1997, una tercera parte más que tres años antes. Emigran a Estados Unidos (45% de los ejidatarios tiene un familiar en ese país) y aprovechan las remesas o los ahorros del trabajo realizado allá para el consumo o para la compra de activos para su actividad agropecuaria, sobre todo ganado. Ante la retirada de los bancos públicos y privados, los campesinos se autofinancian.
- *Cambio en el acceso a la tierra.* La migración y la quiebra de los campesinos más pobres disminuyen la presión sobre la tierra y facilita que quienes se quedan aumenten la superficie que cultivan mediante el préstamo, el arrendamiento, la mediería, etc. Aumenta el tamaño del minifundio. Otro cambio importante aquí es el mayor acceso de la mujer a la tierra como titular de parcelas y como conductora de la actividad económica familiar.

²⁷ Esta sección toma datos de dos trabajos: CEPAL: *Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina. Reflexiones a partir de experiencias en México, Honduras y Nicaragua*. México: CEPAL, pp. 1 y ss.; y Benjamín Davis. "Las políticas de ajuste de los ejidatarios frente a la reforma neoliberal en México". *Revista de la CEPAL*, núm. 72, diciembre de 2000, pp. 99 y ss.

Los campesinos y las campesinas se niegan a desaparecer. A pesar de que la modernización que les ha sido impuesta los subordina, los explota y a la vez los excluye, causando una gran desarticulación y desorden en sus comunidades, e incluso en sus familias, ellos acuden a un *bricolaje* muy diverso de estrategias de resistencia. De acuerdo con su fuerza sociopolítica y los activos de su explotación agropecuaria, combinan todo un arsenal de “armas de los pobres”: luchas sociales y políticas, formas de organización y solidaridad desde abajo, minimización del riesgo en la producción, migración para financiar su consumo y su capitalización, acceso a más tierras, etcétera. “Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros territorios, no es suficiente con resistir, tenemos que ser capaces de pasar a la construcción de alternativas que nos permitan, por un lado, mantener nuestra tierra, el agua, la vida y nuestros derechos. Y, por otro, la posibilidad de desatar todos los saberes, la imaginación y la creatividad del pueblo al servicio del pueblo”, señalan.

Hacia una caracterización de las nuevas resistencias campesinas en México

Un primer esfuerzo de sistematización de las nuevas características que han adoptado los nuevos movimientos campesinos en México, nos arroja las siguientes:

- *La vuelta del territorio.* El territorio parece ser el nuevo elemento ordenador de lo rural. Hay una resignificación múltiple del mismo: ya no es sólo el espacio de la producción y de la reproducción física del campesinado y sus medios de vida; también de la producción y reproducción de su vida social y cultural. Es el contenedor vivo de los ecosistemas, lugar de tránsito, espacio de contacto y de enlace. Ese territorio polisémico se ha convertido en el objeto del deseo de quienes pretenden localizar ahí la globalización del despojo y de la exclusión, para quienes el territorio es sólo reserva de recursos naturales, de paisajes, asentamiento de proyectos orientados al lucro, espacio de control criminal-militar. La defensa del territorio contra los múltiples despojos y violencias le devuelve la predominancia a la organización comunitaria, a la resistencia local, por sobre los intentos corporativistas y centralistas. Señala Víctor Toledo que:

A la crisis de la civilización moderna e industrial, que es tanto ecológica como social, se irán sumando más y más

batallas por el territorio, entendido como el espacio vital en todas sus escalas. Los seres humanos defienden su hábitat a diferentes niveles: el hogar en primer término, la comunidad, el edificio o el barrio, la región, el país, el planeta. Contra la dupla capital-Estado, la lucha por la vida mueve ya al cambio civilizatorio (*La Jornada*, 12 de octubre de 2016).

- *Alta diversidad en las demandas.* Los motores de las muy diversas luchas campesinas son también muy diversos: lucha por la tierra, defensa de los recursos naturales, contra la desnacionalización y privatización de recursos estratégicos como el agua y el petróleo, contra los tratados de libre comercio, por los derechos, cultura y territorio de los pueblos indios, contra las semillas transgénicas, por la defensa del patrimonio genético de los pueblos, contra las políticas económicas neoliberales, por la participación de las y los campesinos en la definición de políticas, presupuestos y presupuestos públicos, contra las políticas de los organismos multilaterales, como el FMI y la OMC, etcétera.
- *Diversidad de actores.* Anteriormente, los principales actores de las luchas rurales eran los productores, jefes de familia o los jornaleros agrícolas; había un sesgo marcadamente masculino y adulto en ellos. Las cosas han cambiado. Ahora hay una gran participación de las mujeres en la lucha rural. Tal vez siempre habían estado ahí, pero sin visibilidad. Ahora son claramente visibles y su protagonismo es cada vez mayor, como dirigentes, como portavoces, como contingente decisivo. Algo parecido sucede con los jóvenes. También hay una nueva diversidad en cuanto a los sectores sociales involucrados: antes las luchas rurales eran emprendidas básicamente por los campesinos pobres y los proletarios agrícolas. Pero la devastación de la política neoliberal ha sido de tal magnitud que ha dañado seriamente la economía de las capas medias rurales e incluso de algunos empresarios agrícolas, antes prósperos.
- *Diversificación de los adversarios.* Los adversarios tradicionales de los movimientos rurales han sido básicamente dos: los ricos del campo y el Estado. Dentro de los primeros están los latifundistas, los hacendados, los intermediarios. Contra ellos se han dirigido las luchas por la tierra, contra el acaparamiento de tierras y agua, contra la apropiación privada de los recursos comunitarios, contra el coyotaje de las cosechas. El Estado es, a su vez, la contraparte de las luchas por la dotación de tierras o la recuperación de las mismas, por apoyos

y subsidios al proceso productivo, por dotación de servicios a las comunidades. Esto sigue siendo así, pero han aparecido nuevos adversarios dentro del contexto de la agricultura mundializada. Son, en primer lugar, los poderes económicos transnacionales: organismos multilaterales, como el FMI, la OMC y los gobiernos de los países desarrollados. Contra ellos se enderezan los movimientos contra los tratados de libre comercio, contra los subsidios, contra la apertura de fronteras. En segundo lugar, están las empresas transnacionales, los gigantes del agronegocio. Forman parte también del poderío económico transnacional, pero a ellas se dirigen otras demandas muy específicas: contra la exportación *dumping* de sus productos, que atenta contra la soberanía alimentaria de las naciones; contra el uso de transgénicos, contra el empleo de agroquímicos que devastan el medio ambiente. Figuran también ahora las empresas transnacionales que impulsan grandes proyectos mineros, de energía, gasoductos, parques eólicos, presas, desarrollos turísticos.

- *Nuevas formas de organizar y coordinar.* Las grandes centrales campesinas, oficialistas o independientes han entrado en crisis. No sólo la CNC, sino otras coordinadoras nacionales que se han dividido varias veces y que han entrado en procesos de desgaste y dispersión. Ahora las formas de coordinarse son más puntuales, más por problemas, por demanda, más funcionales y horizontales, menos descentralizadas y jerárquicas. Así como aparecen formas de coordinación, así se agotan y surgen otras. Esto tiene la ventaja de ir debilitando el corporativismo, de disminuir la dependencia de las organizaciones con respecto a los partidos políticos, de prescindir de caudillismos y de liderazgos apelmazados.
- *Vinculación con otros sectores sociales.* Tanto el carácter de las demandas como el de los adversarios ha ido estableciendo un terreno común y los movimientos campesinos se han ido vinculando y emprendiendo acciones con otros sectores sociales. El primero de ellos son los pueblos indios, quienes comparten el medio rural con los campesinos y además buena parte de las demandas de éstos. Han establecido, asimismo, una permanente vinculación con los consumidores urbanos, tanto en la denuncia de las importaciones de alimentos de baja calidad o transgénicos como en la construcción de cadenas de comercio alternativo o comercio justo de productos agropecuarios. Se ha ido haciendo más importante la participación de intelectuales, académicos y artistas, así

como de comunicadores de algunos medios de gran alcance.

- *En armonía con la naturaleza.* El cuidado de la naturaleza, de los ecosistemas, la producción de energías limpias, el uso racional del agua, que se “siembra y se cosecha”, es otro de los elementos infaltables en las nuevas formas de resistencia y en las luchas campesinas actuales.
- *Articulación internacional.* Los actores rurales han logrado un grado de internacionalización nunca antes visto. A las relaciones casi meramente simbólicas que se daban en congresos y en los eternos “intercambios de experiencias” ha seguido un trabajo más sistemático donde se llevan a cabo campañas internacionales simultáneas, formación de dirigentes y estructuración de organizaciones plurinacionales, con movilizaciones conjuntas. El ejemplo más avanzado hasta ahora es el de la Vía Campesina, organización verdaderamente global de las y los productores familiares. Gracias a ella, se han hecho posibles la presión directa y la movilización de la opinión pública internacional en foros como las reuniones de la Organización Mundial del Comercio, del Área de Libre Comercio de América Latina (ALCA), o la coordinación de instancias de discusión y planteamientos estratégicos como el Foro Social Mundial.

Con esta gran diversidad de formas de resistencia, por un lado, pero de paciente construcción de un modelo que se oponga al del despojo-destrucción y exclusión, las comunidades campesinas e indígenas en esta segunda década del milenio han ido sembrando alternativas diversas de producción y convivencia. Esta multiplicación, esta floración de acciones comunitarias cotidianas creativas, combinadas con las fragorosas defensas de las comunidades y su entorno cuando así se requiere, señalan el rumbo diverso, combinado unas veces, separado otras, por el que desde abajo se va tejiendo un nuevo modelo civilizatorio.

Como señala la declaración final del “Encuentro y Jornadas por la Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida”, celebradas en Atenco en agosto de 2014:

Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros territorios, no es suficiente con resistir, tenemos que ser capaces de pasar a la construcción de alternativas que nos permitan, por un lado, mantener nuestra tierra, el agua, la vida y nuestros derechos. Y por otro, la posibilidad de desatar todos los saberes, la imaginación y la creatividad del pueblo al servicio del pueblo.